

Señor:
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO (Reparto)
Buga - Valle.

ANA LIGIA LONDOÑO CRUZ, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Tuluá Valle, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.725.248 expedida en Tuluá (V)., abogada titulada y en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 205.332 del Consejo Superior de la Judicatura; obrando de conformidad con el poder conferido por el señor **ALBERTO LLANOS MORALES**, mayor y residente en el Municipio de Tuluá Valle, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.696.998 expedida en Zarzal Valle. Comedida y respetuosamente, presento demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE, identificado con Nit. 891.900.353-1 y representado legalmente por el señor Alcalde Municipal, de conformidad con el numeral 3 del artículo 315 de nuestra Carta Política, para que se hagan las siguientes:

I. DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERO: Que es nulo el Acto Administrativo: Resolución sin número de fecha 13 de Abril de 2016, mediante la cual, el Municipio de Bugalagrande Valle, resuelve negar la solicitud de terminación del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002 y en su lugar, conceder la prescripción de las obligaciones tributarias originadas en el impuesto predial unificado a cargo del demandante.

SEGUNDO: Que es nulo el Acto Administrativo: Resolución sin número de fecha 25 de Abril de 2016, mediante la cual, el Municipio de Bugalagrande Valle, resuelve negar la solicitud de terminación del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002 y en su lugar, conceder la prescripción de las obligaciones tributarias originadas en el impuesto predial unificado a cargo del demandante.

TERCERO: Que a título de restablecimiento del derecho y de conformidad con la siguiente normatividad: artículo 91-3 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 817 del Estatuto Tributario, se declare: a) la terminación del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002, por la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos emitidos dentro del mismo. b) la extinción de la obligación impositiva, por la institución de la prescripción extintiva del derecho que le asiste al Municipio de Bugalagrande Valle, Secretaria de Hacienda, para ejercer la acción de cobro de las obligaciones a nombre del señor **ALBERTO LLANOS MORALES**, por concepto de impuesto predial, por el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de 1996 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2010.

II. HECHOS Y OMISIONES

PRIMERO: El señor **ALBERTO LLANOS MORALES**, es propietario de un inmueble ubicado en la calle 5 No. 3 - 39 del Municipio de Bugalagrande Valle, identificado con número predial 01-000-0042-0003-000 del mencionado Municipio y matrícula inmobiliaria No. 384-211 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle.

SEGUNDO: El Municipio de Bugalagrande Valle, inició en junio de 2002, Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002, para realizar por la vía coactiva el cobro del impuesto predial adeudado por el señor **ALBERTO LLANOS MORALES**, en razón al bien inmueble de su propiedad identificado en el hecho anterior.

TERCERO: El Municipio de Bugalagrande Valle, por intermedio de su Secretaria de Hacienda – Profesional Universitario de Rentas, expidió el Acto Administrativo Resolución No. 009 del 19 de Junio de 2002, *“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DEUDOR AL SEÑOR ALBERTO LLANOS MORALES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL ADEUDADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE CONFORME EL RECIBO PREDIAL No. 2651”*.

CUARTO: La Resolución No. 009 del 19 de Junio de 2002, emitida por la Secretaria de Hacienda Municipal de Bugalagrande contra el señor ALBERTO LLANOS MORALES, procuraba el cobro por concepto de impuesto predial, de las obligaciones correspondientes al periodo comprendido entre enero de 1996 hasta junio 2002, señalando como valor adeudado la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$4.177.052,00) M/cte.

QUINTO: En el año 2005, el Municipio de Bugalagrande Valle, a través de su Secretaria de Hacienda – Profesional Universitario de Rentas, constituye la Resolución No. 009 en título ejecutivo, luego de quedar en firme el 23 de julio de 2002. Procede a iniciar Proceso Administrativo de Cobro Coactivo, expediente No. 009-2002, mediante el cual profiere Mandamiento de Pago No. 006 del 09 de Marzo de 2005, en contra del señor ALBERTO LLANOS MORALES, por concepto de impuesto predial y complementarios del bien inmueble con ficha catastral No. 01-000-0042-0003-000.

SEXTO: En la misma fecha anterior, el Municipio de Bugalagrande Valle, Secretaria de Hacienda – Profesional Universitario de Rentas, Profiere Resolución de Embargo No. 020 del 09 de Marzo de 2005, que ordena el Embargo y Secuestro del bien inmueble ubicado en la calle 5 No. 3 - 39 del mencionado Municipio e identificado catastralmente con No. 01-000-0042-0003-000 de Bugalagrande y matricula inmobiliaria No. 384-211 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle.

SEPTIMO: La orden contenida en la Resolución No. 020 del 09 de Marzo de 2005, fue comunicada mediante Oficio No. 069 del 10 de marzo de 2016, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle, a efectos de su inscripción en el respectivo folio de matrícula. Visible en la Anotación No. 9 del Certificado de Tradición y Libertad del inmueble.

OCTAVO: Para el presente año gravable, el señor ALBERTO LLANOS MORALES, en procura del saneamiento del bien en mención, se presenta ante el Municipio de Bugalagrande Valle, Secretaria de Hacienda, donde solicita el saldo a su cargo por concepto de impuesto predial unificado, el cual le fue puesto en conocimiento a través de la factura No. 110020382025 por valor de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$25.285.738,00) M/cte.

NOVENO: Por lo anterior, y sin contar con los recursos suficientes para la cancelación de la factura No. 110020382025; en fecha 29 de Febrero de 2016, el señor ALBERTO LLANOS MORALES, a través de apoderada, presenta Derecho de Petición ante la Secretaria de Hacienda del Municipio de Bugalagrande Valle, en el cual solicita de conformidad con el artículo 91-3 de la Ley 1437 de 2011, la terminación del Proceso administrativo de Cobro Coactivo, teniendo en cuenta que, los actos administrativos en él expedidos, han perdido su fuerza de ejecutoria (perdida de obligatoriedad) por haber transcurrido cinco años de estar en firme y la autoridad municipal no los ha ejecutado: en consecuencia librar comunicación a la Oficina de Registro de cancelación de la medida cautelar de embargo. Igualmente, solicita declarar la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones tributarias a su cargo.

DECIMO: Vencido el termino de Ley sin obtener respuesta del Derecho de Petición, el señor ALBERTO LLANOS MORALES, en fecha 08 de Abril de 2016, interpuso Acción de Tutela para proteger sus Derechos Constitucionales Fundamentales DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, A LA PROPIEDAD Y A LA VIVIENDA DIGNA.

DECIMO PRIMERO: Dentro del término de traslado de la acción Constitucional, el accionado Municipio dio respuesta del Derecho de Petición mediante Acto Administrativo sin número del 13 de abril de 2016, manifestando resumidamente que la actuación procesal llevada a cabo en el 2005 se encuentra en firme por cuanto el contribuyente no agoto proceso ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para declarar la nulidad del acto administrativo emitido por el Municipio de Bugalagrande y en consecuencia niega Las peticiones realizadas.

DECIMO SEGUNDO: Posteriormente, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Tuluá, emite Sentencia de Tutela No. 058 del 22 de abril de 2016, donde resuelve tutelar el Derecho Fundamental de Petición, al considerar que la respuesta dada por el municipio mediante acto Administrativo sin número del 13 de abril de 2016, no resuelve de fondo la petición y en consecuencia ordena al encargado del cobro de las deudas fiscales en el Municipio de Bugalagrande, dar respuesta de manera clara, concreta y de fondo al Derecho de Petición recibido por la entidad en fecha 29 de Febrero de 2016.

DECIMO TERCERO: Acatando el fallo anterior, el Profesional de Rentas Municipales, emite Acto Administrativo sin número del 25 de abril de 2016, donde se mantiene la misma decisión dada en la respuesta anterior y se adiciona fundamento jurídico en el artículo 818 del Estatuto Tributario.

DECIMO CUARTO: Por último, mediante oficio No. 1042 del 29 de abril de 2016, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Tuluá, notifica al señor ALBERTO LLANOS MORALES, la decisión tomada por auto No. 886 del 29 de abril de 2016, donde resuelve conceder la impugnación interpuesta por la parte accionada contra la Sentencia de Tutela No. 058 del 22 de abril de 2016; impugnación que correspondió al juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá, el cual emitió la Sentencia de Segunda Instancia No. 118 del 16 de junio de 2016, que dispone en el primer punto de su resuelve, adicionar la decisión del A quo, para declarar improcedente la acción de tutela en cuanto a la terminación del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002 y la solicitud de aplicación de la prescripción realizada por el señor ALBERTO LLANOS MORALES.

III. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Constitución Política de Colombia: artículos 209, 287 # 3 y 317

Estatuto Tributario: artículos 817 y 818

Ley 1739 de 2014, Decreto Nacional 2452 de 2015

Ley 1551 de 2012: artículo 2

Ley 1437 de 2011: artículos 3 y 91 #-3

Ley 383 de 1997: artículo 66; Ley 788 de 2002: artículo 59

Con las decisiones tomadas por el Municipio de Bugalagrande Valle, Secretaria de Hacienda – Profesional Universitario de Rentas; en primer lugar, al rechazar la solicitud de dar por terminado el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002, con el consecuente levantamiento de las medidas cautelares que del mismo se desprenden y posteriormente, a través del Acto Administrativo sin número del 13 de Abril de 2016,

ratificado por Acto Administrativo sin número del 25 de Abril de 2016, que niegan la aplicación de la prescripción de la acción de cobro en las obligaciones que por concepto de impuesto predial unificado existen a cargo del señor ALBERTO LLANOS MORALES; decisiones con las que se infringieron los siguientes preceptos Constitucionales y Legales: de la Constitución Política el artículo 287 # 3 (Ley 1551 de 2012 artículo 2), que faculta a los Municipios para que realicen la administración de los recursos, por medio del establecimiento de tributos, que permitan el cumplimiento de sus funciones; siendo requisito indispensable el recaudo efectivo por parte de la administración municipal, el cual, en el caso que nos ocupa no se ha realizado. Con la negación de la prescripción solicitada por el señor ALBERTO LLANOS MORALES, pretende la administración municipal recuperar los recursos dejados de percibir debido a la inoperancia del sistema de recaudo establecido por el municipio, menoscabando el derecho del contribuyente, adquirido por el transcurso del tiempo sin que la administración ejecutara los actos administrativos que profirió.

1. Respetto del término de la prescripción:

Conforme al artículo 817 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014, Reglamentado por el Decreto Nacional 2452 de 2015, **la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:** la presentación de la declaración de renta oportunamente; la presentación extemporánea de la declaración, o la corrección de la declaración, **la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.** Este último, para el evento de que se haya producido acto administrativo de determinación del impuesto, según el cual, el término se cuenta a partir de la ejecutoria del acto de liquidación o de la resolución que falla el recurso administrativo (negrillas fuera de texto).

Conforme al artículo 818 del Estatuto Tributario, la prescripción se interrumpe, entre otras causas legales, por la notificación del mandamiento de pago en el proceso de cobro coactivo del tributo. Advierte el mismo artículo, en forma que no deja duda al respecto, que “interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago”. Para el proceso de cobro coactivo de los tributos, interrumpida la prescripción por notificación del mandamiento de pago, desde el día siguiente de dicha notificación se reanuda el término de prescripción de la obligación tributaria. Así las cosas, la norma sustancial dispone el inicio de un nuevo plazo prescriptivo en contra del acreedor negligente que, sin justificación, abandona el proceso por un lapso igual al de la prescripción inicial. Si, a pesar de haber operado la prescripción, se llega al remate de los bienes embargados en el proceso ejecutivo, es posible pedir a la entidad la devolución por pago de lo no debido, conforme al inciso 2º del artículo 850 del Estatuto Tributario, previa declaración del juez o funcionario, en el sentido de que ha operado la extinción de la obligación tributaria por prescripción.

Por lo anterior, se puede decir que, transcurridos cinco años después de emitida cada factura de cobro de impuesto predial, recae sobre la misma el fenómeno jurídico de la prescripción; de igual manera ocurre con la notificación del mandamiento de pago, que a partir del día siguiente de la misma tiene tolerancia la prescripción de la obligación tributaria y que, como consecuencia de ello, puede pedirse la terminación del proceso coactivo.

Adicionalmente, cabe recordar que las normas del Estatuto Tributario son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, tanto para los particulares como para los entes públicos y sus funcionarios, recordando que la administración pública se rige además por el artículo 6º Constitucional.

La ley 791 de 2002, artículo 2º, dispuso: Agréguese un inciso segundo al artículo 2513 del Código Civil, del siguiente tenor:

“La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse **por vía de acción** o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella” (negrilla fuera de texto).

2. De la Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo:

De conformidad con el artículo 91- 3 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados, entre otras causas legales, cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

Con relación a lo anterior, se entiende que todo acto administrativo goza de presunción de legalidad, una vez emitido y notificado, el acto nace a la vida jurídica y por tanto tendrá que ser materializado y ejecutado por las autoridades competentes en aras que la voluntad de la administración no sea letra muerta. No obstante, el artículo 88 de la ley 1437 de 2011, al referirse a la presunción de legalidad que cubre todo acto administrativo luego de quedar en firme, plantea dos situaciones posibles; la primera se refiere a cuando el acto ha sido demandado y a través de la jurisdicción competente se declara la nulidad del mismo y por tanto se desvirtúa la presunción de legalidad que lo cubría. Y por otro lado, la mencionada norma contempla un escenario de transición en el sentido en que a pesar de haber sido demandado el acto, no se ha resuelto aún sobre su validez, por lo que todavía se encuentra inmerso dentro de la presunción de legalidad, suspendiéndose sus efectos como medida preventiva.

Finalmente, Artículo 92 de la Ley 1437 de 2011, faculta al sujeto afectado por una decisión inmersa dentro de un acto administrativo, a que denuncie su falta de ejecutoria antes de que la autoridad que emitió el acto lo ejecute, pudiendo esta última decidir dentro de un plazo de quince (15) días sobre la viabilidad de la misma. Este derecho del que gozan los ciudadanos se conoce como excepción de pérdida de ejecutoriedad y el acto que la decide de fondo no admite recursos, pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional.

3. De los Principios del Derecho Administrativo:

La Constitución Política de Colombia en su artículo 209 en relación con dichos principios manifiesta:

*“(…) **ARTICULO 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (...)”

La Ley 1437 de 2011, en su artículo 3 consagra los principios que orientan el Derecho Administrativo, según los cuales, en virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Con el procedimiento adelantado por la administración municipal de Bugalagrande Valle, en el año 2002, mediante el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002, del cual a la fecha, se predica la pérdida de ejecutoriedad de todos sus actos administrativos; con la negativa de dar aplicación a la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones generadas desde el 01 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2010; se vulneran los principios anteriormente enunciados, de los cuales se predica la garantía y/o defensa de los derechos de los ciudadanos, así como la eficacia de las actuaciones de la administración.

En este sentido la Corte Constitucional en Sentencia C-188 de 1999 expresa que:

“(…)… en la disposición impugnada se muestra con claridad el desconocimiento de los principios de igualdad, eficacia y celeridad, que deben presidir la función administrativa, según el artículo 209 Ibídem. El Estado, en sus relaciones con los particulares, no puede asumir legítimamente las conductas que censura y castiga si provienen de ellos. Si les exige puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias, y si tan duramente castiga el hecho de que no las cancelen a tiempo, elementales principios de justicia y equidad hacen imperativo que, correlativamente, su propio comportamiento en idénticas situaciones se ajuste a las exigencias que formula a los particulares (…).”

4. Conclusión:

Señor Juez Administrativo, de acuerdo a lo argumentado, es claro que con fundamento en el ordenamiento jurídico, el procedimiento emprendido alguna vez por la parte demandada en aras de efectuar, por la vía coactiva, el cobro del impuesto predial adeudado por la parte demandante, es ahora inoperante para cumplir con tal finalidad. Adicionalmente, no le asiste razón válida a la administración aquí demandada para su negativa a proceder con la aplicación de la prescripción solicitada, la cual se encuentra facultada por la norma para decretarla, inclusive de oficio, con el solo cumplimiento del requisito del transcurrir del tiempo que establece la Ley para que el fenómeno prescriptivo se configure; es por ello que, existe falsa motivación de los actos demandados, toda vez, que su fundamento no está encaminado a pronunciarse sobre los requisitos de la prescripción y menos del decaimiento del acto administrativo por su pérdida de ejecutoria; por las razones expuestas es que comedidamente le solicito que se declare la Nulidad de los actos administrativos emitidos por la administración municipal de Bugalagrande Valle, los cuales fueron relacionados en el acápite de las declaraciones y condenas. Posteriormente, que proceda en restablecimiento del derecho del señor ALBERTO LLANOS MORALES, con la terminación del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002, debido a la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos que lo contemplan y conceda la prescripción de las obligaciones por concepto de impuesto predial, comprendidas entre el periodo enero de 1996 hasta diciembre de 2010, de conformidad con la normatividad vigente.

IV. SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Solicitar de manera comedida y respetuosa, la medida provisional de suspensión y no aplicación de los actos administrativos emitidos o que pueda emitir la entidad demandada conducentes al remate del bien inmueble identificado en el hecho primero de la presente demanda, con la finalidad de evitar la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y a la vivienda digna, toda vez, que el inmueble referido es la única propiedad que posee mi poderdante y se encuentra en riesgo de ser rematado por la administración Municipal de Bugalagrande Valle, ya que con ello estarían generando perjuicios ciertos e inminentes al accionante.

Como se detalla en los hechos u omisiones de la demanda y demostrado objetivamente con las normas Constitucionales y Legales citadas, con el concepto de su quebrantamiento antes expuesto, comedidamente solicito se disponga, por confrontación directa, la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, de conformidad con las disposiciones que regulan la medida: artículos 238 de la Constitución Nacional y 231 del C.P.A.C.A., pues aparece prima facie la contradicción entre los actos acusados y los preceptos vigentes para agotar el cumplimiento de aquellos.

La infracción es manifiestamente contrario a derecho, por desacato de la técnica jurídica que señala el término de ejecutoriedad de los actos administrativos, así como la prescripción de la acción de cobro. En definitiva, se desconocieron las normas reseñadas, con la negativa de la administración Municipal de Bugalagrande Valle, de dar por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo No. 009-2002 y proceder con la aplicación del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado a cargo de mi representado. Decisiones administrativas sin fundamentos razonables, circunstancia que implica quebrantamiento directo de las disposiciones cuya violación se conceptuó, resultando actualmente, los actos administrativos demandados, inoperantes ante la legalidad interna y externa

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento la presente demanda en la siguiente normatividad: artículos 3, 91 #-3, 162, 164 y 166 de la Ley 1437 de 2011; artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes.

VI. PRUEBAS

Respetuosamente solicito que se tengan como pruebas las siguientes:

1. Los documentos anexos a la presente demanda
2. Copia de la cedula de ciudadanía del señor ALBERTO LLANOS MORALES
3. Los antecedentes administrativos relacionados con el proceso administrativo de cobro coactivo No. 009- 2002, y cualquier otro que en procura de realizar el cobro del impuesto predial al señor ALBERTO LLANOS MORALES, haya emitido la Administración Municipal de Bugalagrande Valle.
 - a. Copia de Resolución No. 009 de 2002, que declara al demandante deudor del Municipio de Bugalagrande Valle por concepto de impuesto predial.
 - b. Copia de Mandamiento de Pago No. 006 del 09 de marzo de 2005
 - c. Copia de la Resolución de Embargo No. 020 del 09 de marzo de 2005
 - d. Oficio No. 069 del 10 de marzo de 2005, que solicita inscripción de la medida de embargo ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle

- e. Copia de la constancia de inscripción de la medida de fecha 11 de abril de 2005, expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle
- f. Copia del certificado de tradición del 11 de abril de 2005, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle, donde consta la inscripción de la medida
- 4. Copia de Derecho de Petición radicado ante el municipio de Bugalagrande Valle, el día 29 de febrero de 2016, mediante el cual se solicita terminación del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 009-2002 y aplicación de prescripción.
- 5. Acto Administrativo Sin número, de fecha 13 Abril de 2016 que da respuesta al derecho de petición anterior
- 6. Copia de la Sentencia N° No. 058 del 22 de abril de 2016, del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Tuluá Valle.
- 7. Acto Administrativo Sin número, de fecha 25 de Abril de 2016
- 8. Copia de la última factura de impuesto predial unificado por valor de \$25.285.73810.
- 9. Copia de Certificado de Tradición actual
- 10. Copia de la Sentencia 2 Instancia No. 118 del 16 de junio de 2016, del Juzgado Segundo Civil de Circuito de Tuluá Valle.

VII. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Es competencia de este Juzgado, en primera instancia, por la naturaleza de los actos demandados que son del orden Municipal y por razón del territorio donde se profirieron los actos administrativos.

El trámite del proceso se seguirá por el procedimiento reglado en el Título V del CPACA.

VIII. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

De acuerdo al artículo 161 de la ley 1437 de 2011, como requisito previo a la demanda cuando los asuntos sean conciliables.

En el presente caso, no es posible adelantar el trámite de la conciliación extrajudicial contencioso administrativa por encontrarnos frente a un conflicto de carácter tributario, sobre el cual no procede el acuerdo conciliatorio de conformidad con el parágrafo 2 artículos 70 de la Ley 446 de 1998.

IX. ANEXOS

Anexo los siguientes documentos:

- Poder para actuar
- Los documentos enunciados en el acápite de pruebas.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado
- Copia simple para el archivo del Juzgado.
- Copia en medio magnético de la demanda.

X. CUANTÍA

Estimación razonada de la cuantía: La cuantía se estima en VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$25.285.738,00) M/cte.

XI. NOTIFICACIONES

Indico como lugar para las notificaciones los siguientes:

Al Demandado: Municipio de Bugalagrande Valle, Carrera 6 # 5-65 Centro. E-mail: hacienda@bugalagrande-valle.gov.co PBX. 223 67 45 de Bugalagrande Valle.

Al Demandante: En la Carrera 39 No. 21-27 Tuluá Valle. Teléfono 315 393 4317

A la suscrita, En la secretaria de su despacho o en la Carrera 27 No. 24 – 56 Centro de la ciudad de Tuluá Valle. Teléfono 2251397 E-mail: anliloc@hotmail.com

Atentamente,

ANA LIGIA LONDOÑO CRUZ

CC: 66.725.248 de Tuluá V.

TP: 205.332 del C.S. de la J.